Globethics Repository



Una agenda democrática frente al Mercosur [A democratic agenda against the Mercosur]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Alimonda, Hector
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-05 15:13:11
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220468

Nueva Sociedad Nro.121 Septiembre-Octubre 1992 , pp. 26-34

*Una agenda democrática frente al Mercosur**

Alimonda, Héctor

Héctor Alimonda: sociólogo argentino residente en Brasil. Docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Miembro del Grupo de Trabajo Permanente sobre Mercosur de la Central Única de los Trabajadores - CUT.

En julio de 1986, los presidentes Raúl Alfonsín, de Argentina, y José Sarney, de Brasil, firmaron una serie de acuerdos que dieron origen al Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina/Brasil (PICE). Los nuevos gobiernos de Carlos Menem y de Fernando Collor de Mello decidieron a su vez ampliar el PICE, dando origen al Mercosur, instituido por el Tratado de Asunción, de marzo de 1991. El gobierno uruguayo de La calle decidió adherir a esta propuesta, y la sustitución de la dictadura de Stroessner por el régimen transicional del general Rodríguez favoreció la incorporación de Paraguay. Veamos a continuación las características de cada fase de este nuevo proceso de integración latinoamericana y unas notas para una alternativa a la internacionalización pasiva.

Para Pancho Aricó

El proyecto original del PICE estuvo constituido por 24 protocolos sectoriales, formulados a partir de principios estratégicos de «gradualismo, equilibrio y realismo». Esto le dio características novedosas en relación a anteriores experiencias latinoamericanas de integración, que pecaron por exceso de ambiciones, y le permitió insertarse en la nueva normatividad propuesta por la ALADI. Su importancia en términos de relaciones regionales no puede ser menos preciada, ya que vino a poner fin a una antigua rivalidad entre las dos mayores naciones sudamericanas. Pudo implementarse en función de la de moralización y de legitimación política de los actores que tradicionalmente respaldaban esa rivalidad (fuerzas armadas), pero fue también una estrategia para afianzar los nuevos regímenes democráticos.

Dos períodos en la integración

En efecto, en la Cuenca del Plata la recuperación democrática coincidió con un agravamiento de la crisis económica. Incapacitados de recuperar las propuestas desarrollistas clásicas, los nuevos gobiernos recurrieron entonces a un recurso ya desacreditado por experiencias anteriores: el de la integración regional. Esta vez, las características de la propuesta la hicieron más viable. La propuesta del PICE suponía:

1) «Unirse para crecer», a través de la formulación de una alternativa de desarrollo conjunto, de un amplio programa de integración económica y cooperación.
2) El interés mayor del programa era el incentivo a la integración intraindustrial, a través de la ampliación del intercambio de insumos industriales semielaborados, superando así las limitaciones que la recesión imponía en cada economía nacional, y moderando los efectos deficitarios en el comercio exterior de una futura reactivación.
3) Los intercambios comerciales de bienes primarios y de bienes industriales terminados eran parte importante del PICE, pero no su fin estratégico: tenían el sentido de fortalecer y agilizar vinculaciones entre dos economías que se mantenían relativamente protegidas en relación al mercado internacional.
4) Los objetivos del PICE se explicitan con la inclusión de varios protocolos referidos a la colaboración científica y tecnológica, incluyendo industria militar, energía nuclear y biotecnología. Se trataba de una respuesta común a los desafíos tecnológicos contemporáneos, un equivalente en dimensiones latinoamericanas al proyecto europeo Eureka. Existe también un protocolo cultural, referido a la industria editorial, cinematográfica, televisión y a la promoción de actividades en ese ámbito.
5) La iniciativa de los gobiernos creaba entonces un marco para una nueva propuesta de desarrollo, que era al mismo tiempo selectivo (con negociaciones por sector y por producto) y multidimensional (no se basaba solamente en intercambios comerciales, sino en un amplio registro de perspectivas de colaboración). El gradualismo del proceso tenía el objetivo de dar tiempo a que los sectores productivos de ambos países se ajustasen a las contingencias creadas por esta apertura parcial y selectiva de mercados, sedimentar intereses entre todos los participantes y desarrollar proyectos compatibles con la realidad económica de cada país.

A partir del Acta de Buenos Aires, firmada por Menem y Collor en julio de 1990, y del Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, que crea el Mercosur, incorpo-

rando a Uruguay y al Paraguay, el carácter del proceso se altera radicalmente. Veamos sus nuevas características.

- El criterio «gradual y selectivo» es abandonado, y se pasa a un acuerdo de desgravación progresiva, lineal y automática, a razón de 20% anual, para culminar el 31 de diciembre de 1994 con la liberación total, plazo que se extiende un año para Uruguay y Paraguay. Esta liberación pasa a incluir a los productos «sensibles», como los argentinos de clima subtropical, que habían constituido una «lista de excepciones». La integración tiene ahora un plazo fijado, pierde su carácter selectivo e implicará la formación de un mercado unificado. Se aumenta drásticamente el número de sectores afectados (todos), y se limita el tiempo asignado para su ajuste a las nuevas condiciones.
- Al mismo tiempo, los Estados nacionales restringen drásticamente su función reguladora, y se limitan a dejar actuar a las fuerzas de mercado, concentrándose en la coordinación de sus políticas macroeconómicas (básicamente, la política cambiaria).
- Pero al mismo tiempo que la integración se acelera, pierde su carácter global, y son desactivados los proyectos tecnológicos conjuntos.
- El énfasis en el mercado coloca en un lugar estratégico a los intercambios comerciales, con la disminución del interés original en buscar alternativas conjuntas de desarrollo, reduciendo el Mercosur a una liberalización del comercio, en la más pura tradición ortodoxa.
- Pero lo paradojal es que, junto con esta aceleración de la integración regional, los gobiernos proceden a una apertura general de sus economías al mercado internacional, especialmente en el caso argentino. En lugar de una apertura preferencial y selectiva en relación a socios regionales, se procede una dilución drástica de la frontera común con la economía internacional. Se constituye así el Mercosur a partir de una contradicción lógica, que confunde desde el comienzo sus objetivos. En efecto, las discusiones sobre la coordinación macroeconómica, en el contexto de la ofensiva norteamericana con la Iniciativa para las Américas (que todos estos gobiernos apoyan), parecen constituir un dispositivo más de presión sobre Brasil país que alcanzó el mayor grado de desarrollo relativo de la región a partir de una política de orientación proteccionista, en el sentido de forzarlo ahora a una reconversión liberal. Esa posición fue claramente explicitada por el representante paraguayo en diciembre de 1991, en la reunión de Ministros de Economía que se realizó en Río de Janeiro.

Otro rasgo relevante es que comienzan a estructurarse núcleos de negociación y articulación. Se establece el Grupo Mercado Común, organismo ejecutivo con repre-

sentantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y de los Bancos Centrales, que comienzan a discutir la armonización de políticas y a formar grupos de trabajo con sectores empresariales. También se establece una Comisión Parlamentaria Conjunta. Pero llamemos la atención sobre un hecho decisivo: esta ampliación del espacio de la discusión se realiza cuando todas las decisiones fundamentales ya han sido tomadas.

En síntesis: el proyecto del Mercosur reafirma la opción neoconservadora del Estado mínimo, que se impone a nivel nacional y se reproduce en la integración regional. Los Estados nacionales que lo componen renuncian a su capacidad reguladora: la reestructuración productiva será procesada por la lógica de los mercados, por la canibalización y/o la cartelización. Pero esta opción abarca también a los efectos del proceso sobre las estructuras regionales y sociales. El «fanatismo de mercado» es tal que, a diferencia de otros procesos de integración internacional, como la Comunidad Europea o el Pacto Andino, no está previsto ningún tratamiento diferencial para los países de menor desarrollo relativo.

Pero ya que nos referimos a la Comunidad Europea, señalemos otra diferencia: la lógica que presidirá la integración y la necesaria reconversión no es la de la expansión, ampliación e incorporación de nuevos sectores, sino la de economías que profundizan sus mecanismos de exclusión en contextos recesivos. Si décadas de prosperidad europea tuvieron como resultado la llamada «sociedad de los dos tercios», con significativas desigualdades regionales y sociales, la lógica de mercado del Mercosur supone, en la mejor de las hipótesis, la cristalización de las tendencias de exclusión vigentes, en la forma de «sociedades de un tercio».

Por otra parte, cualquier observador informado sabe que la Comunidad Europea es producto de décadas de negociaciones multilaterales, que supusieron sucesivos desdoblamientos de la capacidad reguladora de los Estados nacionales, como el establecimiento de una política agrícola común o el tratamiento de los desequilibrios nacionales y regionales. Los protagonistas fueron gobiernos representativos por su capacidad de articular intereses sociales diversificados, y que tuvieron siempre como objetivos un incremento de las perspectivas de ingresos y de bienestar de sus poblaciones y una ampliación y potenciación de la acumulación de capital. Lo opuesto de nuestras democracias neoconservadoras periféricas, donde el desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado y de las mínimas conquistas sociales y laborales de la población, junto con la consolidación de nuevos mecanismos de exclusión, son presentados como éxitos.

Coherentemente con su inspiración, los gobiernos realizaron la parte fundamental de las negociaciones, hasta la firma de los Tratados, sin promover la información, el debate, el análisis de las consecuencias y la participación de los sectores que serán afectados por el proceso de integración. Sólo a partir de la constitución del Grupo Mercado Común es que se incorpora una instancia orgánica de diálogo con intereses societarios, pero apenas para viabilizar la implementación de decisiones estratégicas ya tomadas. Esta convocatoria, por otra parte, está organizada por sectores económicos, lo que limita su alcance a los problemas estrictamente localizados, sin afectar a la orientación del proceso global. Pero además, está restringida a los empresarios de cada sector: sólo en el Uruguay el movimiento sindical reivindicó (y obtuvo) su participación en el conjunto de las comisiones.

Perspectivas del Mercosur

Desde la independencia, el fantasma de la integración latinoamericana es uno de los que con mayor asiduidad recorren nuestro continente. Posee una serie de connotaciones positivas, que lo articulan con reivindicaciones propias del campo democrático-popular, como la insistencia en recuperar nuestras identidades comunes, la búsqueda de una posición conjunta y netamente latinoamericana en el orden internacional, un modelo de desarrollo alternativo, que interiorice sus beneficios hacia las mayorías populares.

Pero también es verdad que esta bandera, en su operatividad concreta, ha sido con más frecuencia una tendencia ligada a las necesidades de expansión y racionalización del capital transnacional (regional y extrarregional), enfrentado con los límites estructurales de los mercados internos latinoamericanos. Es decir, ha sido levantada más como una alternativa para mantener la viabilidad de modelos excluyentes de acumulación de capital y para conservar un orden social polarizado que para apoyar una reorientación democrática de nuestros países.

No queremos desarrollar aquí una evaluación crítica de los intentos anteriores de integración latinoamericana. A los efectos de estas notas, basta decir que el proyecto original del PICE parecía informado de los «impasses» de esa historia, y se proponía como fundamento de una alternativa regional. El Mercosur, por el contrario, se apoya asumidamente en una filosofía social neoconservadora, y hace de la bandera de la integración regional una lectura estrictamente liberal, reduciéndola a liberación del comercio, lo que contradice toda la doctrina integracionista. En el contexto de una disolución general de las fronteras con la economía internacional y de la Iniciativa para las Américas (propuesta por el presidente Bush en junio de 1990,

es decir, ubicada cronológicamente entre el PICE y el Mercosur), la propuesta pierde su sentido básico de sedimentar un bloque subregional frente al resto del mundo (tendencialmente abierto a otros países de la región), para constituir un dispositivo regional de armonización de espacios económicos en vista a su integración en el área de hegemonía comercial de los Estados Unidos.

El discurso integracionista está constituyendo, en el ámbito del Mercosur, una estrategia de ocultamiento. El debate se reduce a una discusión de normas técnicas, reservado a los especialistas y decisores, públicos y privados, que excluyen sistemáticamente la explicitación de posibles consecuencias sociales del proceso. El discurso político legitima este silencio, con invocaciones abstractas a la «herencia doctrinaria peronista» (en el caso argentino), a la mitología latinoamericanista (con connotaciones democrático-populares) y con la constatación «realista» (y falsa, ya que no se basa en análisis «reales» de casos de integración económica) de que 1) el signo de los tiempos es la formación de grandes espacios económicos (curiosamente, la desintegración del COMECON y de la Unión Soviética son citados como ejemplos a favor de esta tesis); 2) la forma de constituir estos espacios consiste en suprimir lo antes posible cualquier restricción al comercio y a la movilidad del capital, junto con una retirada general del Estado de su función reguladora (cuando 35 años de experiencia europea indican lo contrario); y 3) ese es el único camino posible para alcanzar el desarrollo y el bienestar general, consecuencia automática del libre juego del mercado. Ideas ya tan viejas en América Latina que duelen por su falta de imaginación.

Lo que nos interesa aquí es sugerir algunas consecuencias sociales que, nos parece, el Mercosur (si se concreta según el modelo propuesto) puede traer para las sociedades en cuestión. A continuación, tomando como un dato la irreversibilidad del proceso, sugerimos algunos temas que en nuestra opinión deberían ser considerados por el campo político democrático-popular de la subregión. En ambos casos, estamos apenas haciendo sugestiones para un debate: no estamos agotando el tema, sabemos que la práctica social y política presentará nuevas alternativas; podemos, en fin, equivocarnos. Nada de esto significa que la discusión no sea imprescindible, y esperamos, por lo menos, sugerir una agenda de cuestiones sobre la que podrá orientarse la reflexión académica y política.

El sector industrial

En primer lugar, puede esperarse un incremento en la concentración y centralización de capitales, con crecientes acuerdos entre capitales transnacionales para re-

distribución de mercados e integración intra-industrial (como es el caso de Ford y Volkswagen, a través del holding Autolatina). En un ambiente oligopólico, aumentarán las exigencias de eficiencia y competitividad, pero eso no necesariamente supondrá disminución de precios al consumidor.

Al mismo tiempo, nuevas oportunidades se abrirán para pequeñas y medias empresas que no dependan de compradores oligopólicos, y que posean aptitudes sectoriales, organizaciones, tecnológicas y/o de localización para incorporarse ventajosamente al nuevo espacio económico. Algunas empresas argentinas ya lo vienen consiguiendo, y nos parece que éste será el único espacio viable para las empresas uruguayas y paraguayas, así como para muchas del sur brasileño. Pero recordemos que la competitividad de estas empresas depende en gran parte de condiciones laborales especialmente penosas. Muchas otras empresas desaparecerán, o se mantendrán como ofertantes marginales en un mercado oligopólico.

Esta reestructuración tendrá grandes efectos sobre los mercados de trabajo. La previsión obvia es la de un aumento del desempleo global, sin perspectivas de ser neutralizado por eventuales reactivaciones sectoriales que absorberán capacidad ociosa o incorporarán tecnologías capital-intensivas.

El nuevo nivel de competitividad, el proceso de reconvención y el aumento del desempleo tendrán efectos negativos no solamente sobre los salarios reales (con lo que reforzarán las limitaciones de mercado de la integración), sino también sobre los niveles actuales de relaciones laborales. En la Argentina, por ejemplo, el Mercosur es utilizado para justificar la flexibilidad laboral en nombre de la competitividad: se invocan los «intereses nacionales» (amenazados, en todo caso, por compromisos asumidos por el gobierno sin consulta a la sociedad) para completar el retroceso social y el aislamiento político de los trabajadores. En el plano laboral , la perspectiva, para los cuatro países, parece ser la de un fraccionamiento aun mayor del sector, en una perspectiva de nivelación hacia abajo de niveles salariales y de condiciones de trabajo. Esto sin que se cumpla la hipótesis más catastrófica, pero implícita en el Tratado de Asunción, y aceptada despreocupadamente por los gobiernos de Argentina, Uruguay y Paraguay: la libre movilidad de factores de producción (que en cualquier manual de economía incluye a la fuerza de trabajo) supondrá el desborde del inmenso potencial demográfico brasileño (150 millones de habitantes) sobre sus poco densamente poblados vecinos (38 millones), con consecuencias fáciles de imaginar.

El sector agrario

El sector agrario es el más vulnerable a la apertura a la economía internacional, ya que no puede ajustarse a condiciones de competencia por limitaciones naturales y estructurales. Al mismo tiempo, su preservación tiene claros objetivos sociales y hasta ecológicos, como muestra la experiencia de la Comunidad Europea. Pero desde el siglo XIX los países europeos (con excepción de Inglaterra) ya adoptaron políticas proteccionistas en relación a su agricultura. La extensión total de la integración en el Mercosur (a diferencia del Pacto Andino, por ejemplo, centrado en los intercambios industriales) permite prever graves consecuencias en este sector, que no serán atenuadas por regulaciones estatales. Las tendencias a la concentración y a la regresión/dispersión social pueden ser aún mayores en el sector primario que en el industrial.

La concentración en el sector productor de insumos para la agricultura y en el sector agroalimenticio tenderá a aumentar la subordinación de los pequeños productores, con todas las consecuencias previsibles (crisis de la pequeña producción, migraciones, crisis localizadas de abastecimiento, etc.).

Un mercado unificado provocará una intensa reestructuración agrícola, según condiciones naturales y según competitividad técnica. La notable potencialidad argentina en productos agrícolas de clima templado se hará sentir sobre el sur brasileño y el Uruguay, mientras que la producción brasileña eliminará del mercado argentino a los productos tradicionales del Nordeste y Noroeste, y también del Paraguay, como el azúcar, el algodón y la yerba mate.

La cuestión regional

Parece probable que el conjunto de estas cuestiones se manifieste políticamente como una redefinición de la cuestión regional. En condiciones de libre mercado, la integración tenderá a asumir la forma de una dinamización de los intercambios entre regiones privilegiadas (más que entre países, tal como fue el caso comunitario), desarticulando así esquemas de división regional del trabajo ya establecidos. Las regiones más capaces de afrontar las nuevas condiciones de competitividad y la dinámica del mercado unificado serán también las más favorecidas por los nuevos flujos de inversión. Aumentarán los desniveles regionales, redefiniendo hasta las formulaciones clásicas de la unidad nacional.

En Brasil, las importaciones desde Argentina afectarán gravemente al sector agrario de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y eliminará del mercado a productores de baja productividad del Centro. Sin embargo, esta crisis sectorial tendrá compensación con la introducción de nuevos cultivos para el mercado interno y la exportación. Fuera del sector agrícola, por otra parte, existen en esas regiones actividades industriales que se beneficiarán con la integración.

En la Argentina la situación puede ser mucho más grave. El norte argentino se integró al mercado nacional de acuerdo a una división regional del trabajo que lo hacía proveedor de bienes agrícolas subtropicales, abasteciendo a las grandes concentraciones urbanas e industriales de la pampa húmeda, donde se han localizado históricamente los polos dinámicos del crecimiento. Estos sectores compuestos socialmente por pequeños productores de baja productividad, ya han sido afectados por la desindustrialización y la recesión crónica de las últimas décadas, y las importaciones provenientes del capitalizado y eficiente sector agroindustrial brasileño prometen desplazarlos definitivamente del mercado, sin que queden abiertas alternativas viables de reconversión. Una previsión semejante puede hacerse sobre el sector agrícola paraguayo.

El Mercosur, a su vez, favorecería a las exportaciones agrícolas e agroindustriales de la Argentina central, la pampa húmeda y las provincias vinícolas y frutícolas, altamente competitivas en relación al sur brasileño, y moderadamente en relación al Uruguay. La demanda de esta región por productos subtropicales será abastecida por Brasil, con lo que se agravarán los desequilibrios regionales argentinos (ya notables) en una magnitud hasta ahora desconocida.

Desafíos para la imaginación política

¿Cómo enfrentarán las fuerzas políticas que se inscriben en una perspectiva democrática y popular este nuevo escenario? Las respuestas no pueden ser dadas en este ni en ningún texto, pero trataremos de indicar algunas notas para una discusión.

En el corto plazo, no parece posible ofrecer alternativas a la consolidación del Mercosur, de la misma forma en que no se consigue modificar las políticas económicas nacionales. Esto se debe no sólo a la debilidad y desorganización del campo popular, sino también a su heterogeneidad e inclusive a la falta de información y ausencia de discusión pública sobre el tema.

Por esta razón, nos parece que ni siquiera sería deseable, en el corto plazo, una toma de posición adversa al Mercosur. Pero también será peligroso ignorarlo, con el argumento de que «solamente va a beneficiar a los empresarios». También perjudicará a algunos empresarios, y seguramente perjudicará a muchos trabajadores, aunque otros se beneficiarán.

Recientemente, en una conferencia en Río de Janeiro, Giuseppe Vacca utilizó una referencia gramsciana: la «internacionalización pasiva». La internacionalización se está produciendo, irreversiblemente, por encima de las fuerzas populares, sin convocar su participación. Es necesario, entonces, que éstas se movilicen y asuman un rol activo, autónomo y democratizador del proceso. Si no lo impedirán, deben por lo menos tratar de minimizar sus efectos negativos y estar dispuestas para actuar en las nuevas condiciones.

En el corto plazo, los partidos políticos y las organizaciones populares deben abrir el debate en los ámbitos regionales y nacionales, solicitando información sobre el proceso, formulando diagnósticos sectoriales y globales, discutiendo alternativas con los sectores afectados y con los gobiernos locales. Debe reivindicarse participación en las negociaciones, pero siempre y cuando ésta no sea meramente decorativa.

En este sentido, debemos destacar que desde 1989 la Central Unica de los Trabajadores (CUT) de Brasil viene desarrollando un activo programa de trabajo con organizaciones sindicales de los países vecinos, que ha realizado ya varios encuentros sectoriales y de región de frontera. Este texto es, en cierta forma, producto de nuestra participación en esa iniciativa, y pretende reforzarla.

Mientras tanto, debe prepararse el terreno para una internacionalización democrática. Será necesario conocer a los posibles aliados, tarea en la cual los intelectuales podrán realizar importantes aportes. Este conocimiento supone ubicarlos en su historicidad concreta, teniendo en cuenta sus posibilidades y también sus limitaciones. Será necesario conocer los escenarios políticos nacionales y regionales, y prepararse para neutralizar convocatorias nacionalistas, que al oponerse a la integración lo hagan en nombre de recortes o de identidades que dividan a las fuerzas populares.

Las tareas y las posibilidades que se abren para el movimiento sindical son enormes. Quizás la mejor alternativa sea mantener la autonomía política de las centrales sindicales, estrechando los lazos de colaboración a nivel sectorial. En primer lu-

gar, será necesario el conocimiento mutuo entre los sindicatos y sus miembros, y la comunicación intensa en relación a condiciones de trabajo, de negociación y, en general, de la marcha de todo el sector. En ese sentido, por ejemplo, ya están trabajando sindicatos metalúrgicos y de la industria automotriz.

Será necesario disponer de una información sistemática sobre estas cuestiones para poder enfrentar las relaciones con la patronal en la nueva etapa del Mercosur. Eso permitirá la convergencia indispensable de reivindicaciones, regidas siempre por el principio innegociable de igualar «hacia arriba» y no «hacia abajo». Esta será la única forma de evitar retrocesos, pero también de impedir que los avances reivindicativos en un contexto nacional se reviertan en perjuicios para los trabajadores de la misma empresa o sector en otro país. La internacionalización de los capitales y de los mercados obliga al movimiento sindical a internacionalizar sus estrategias.

Las organizaciones del sector agrario, por su parte, deben buscar formas asociativas que trasciendan las fronteras. Cooperativas y otras asociaciones de productores que faciliten su defensa contra los monopolios de comercialización, que permitan influir en la política de precios, de incorporación de tecnología y, sobre todo, proponer modelos alternativos solidarios de organización de la producción. En ese sentido, ya se han realizado varios encuentros en la región misionera, congregando a pequeños productores argentinos y brasileños.

Pero, más allá de esta imprescindible estrategia defensiva, el movimiento democrático debe formular también estrategias positivas, que converjan en la constitución de una «línea de frente» internacional, a partir del anclaje nacional. Esto supondrá, por ejemplo, la capacidad para participar o para proponer alternativas de reconvención sectorial o regionales sin descuidar el plano global/nacional. Muy probablemente, el ámbito regional misionero (el sur brasileño, el nordeste argentino, el este paraguayo y el norte uruguayo) sea el espacio privilegiado para ejercer esta estrategia, donde con mayor perspectiva de éxito y de repercusión las organizaciones populares podrán desarrollar sus propuestas de internacionalización democrática y, desde allí, llegar al plano nacional.

Una estrategia de acción transnacional inmediata no parece viable, y ni siquiera en el mediano plazo. En el momento actual, no podría significar más que declaraciones de cúpula, con dificultades hasta para formular un programa mínimo de acción. Por el contrario, una estrategia que valorice la dimensión regional y sectorial permitirá desarrollar acciones conjuntas desde ahora, acumular fuerzas y experiencias, capacitarse para influir en la conquista democrática de la integración.

En el flanco dejado por la propuesta caníbal de integración, por la omnipotencia de los mercados hay un gran espacio por ser ocupado. La unidad latinoamericana, después de todo, siempre formó parte del horizonte popular y democrático del continente.

Una primera línea de acción positiva, entonces, puede ser recuperar algunos elementos presentes en la propuesta original del PICE, desechados por el Mercosur. Retomar, dotando de un sentido propio, una propuesta de integración que no se agote en intercambios comerciales, sino que avance también decididamente en términos políticos, sociales y culturales. Esta propuesta deberá recuperar también los abortados proyectos de colaboración tecnológica, redefinidos, para atender a las necesidades populares.

A mediano plazo, consolidado un espacio legítimo y efectivo de acción a nivel regional, deberá asumirse la discusión de la reconversión regional, que, inevitablemente, provocará conflictos entre las instituciones políticas locales y el gobierno nacional, si este persiste en su vocación de Estado Mínimo. Esta reconversión exigirá un compromiso estatal no solamente en términos financieros, sino también políticos. No sólo se discutirá el apoyo crediticio a los proyectos de reconversión regional, de recuperación de los niveles de empleo y de apoyo a los productores agrícolas asolados por el mercado, sino también se hará evidente la necesidad de una presencia reguladora de los poderes públicos en ese ámbito. La efectividad de las acciones realizadas y la acumulación de fuerzas permitirán una participación en ese proceso, en la forma de una planificación democrática: otra razón para insistir en la prioridad de las acciones en el ámbito local y regional.

Pero el argumento fundamental (que es un principio y también constituye un objetivo final) para enfrentar los problemas derivados de la implantación del Mercosur es el de tener siempre presente que los conflictos y crisis inherentes a esta propuesta se deben a la persistencia de un régimen de acumulación restrictivo y excluyente. Una reestructuración de la sociedad y de la economía de los cuatro países vinculados en el Mercosur que tuviera como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas de su población eliminaría, sin duda, las perspectivas catastróficas del modelo «suma cero» que se nos presenta.

*Las opiniones vertidas en el presente ensayo son personales y no comprometen al Grupo de Trabajo ni a la CUT.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 121 Septiembre- Octubre de 1992, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**